

LA GUARDIA CIVIL Y LA VIOLENCIA PRIVADA

DIEGO LOPEZ GARRIDO

Catedrático de Derecho Constitucional

INTRODUCCION, VIOLENCIA, CULTURA Y DERECHO

Etimológicamente, "violencia" significa "proyección de una fuerza hacia" alguna cosa. De una forma más precisa el diccionario de la Real Academia de la Lengua define a lo **"violento"** como algo **"que está fuera de su natural estado, situación o modo"**, y según otra de las posibles acepciones de **"violento"**, como lo **"que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón o justicia"**.

Esta última definición nos acerca al núcleo de la conducta que se considera violenta. La violencia es, en efecto, el hecho puro, aquel acontecimiento que, en un sistema de actos o acciones humanas, se impone sin otra justificación, sin vinculación con el resto, como acto en sí y por sí. Su justificación es la voluntad pura del que lo realiza. Cuando un grupo de *skinheads* masacra a ancianos o inmigrantes de color, estamos ante una violencia cotidiana y difusa que no es la del ángel vengador o la del visionario de la justicia, es una violencia sin objetivo, anónima e indeterminada (Barcelona).

La violencia es lo contrario de la *cultura*. La cultura es el sistema dinámico de los actos, de las acciones humanas en su aspecto de clarificación de significados, de interpretación de los hechos mediante la reconducción de los mismos a la intención universal humana, o de construcción de la humanidad como lugar de realización o de relación recíproca de cada uno con los demás (Toesca). La violencia se sitúa en las antípodas, ya que significa la privación del significado trascendente, de la intención singular de un acto, que viene a quedar, así, reducido a hecho puro, a realidad física, sin otro valor que la voluntad del sujeto autor. Esta

es, seguramente, la naturaleza predominante en la violencia moderna, una violencia privada de “mediaciones” o de objetivos.

El derecho moderno nace de la exigencia de solucionar el conflicto, como mecanismo accesible a todos, que impida el desencadenamiento de la violencia o, mejor dicho, que impida que la violencia se convierta en la decisora de los conflictos. El problema es que esto no es suficiente ya que ese derecho se muestra demasiadas veces como pura técnica neutral, sin ligazón con la idea de justicia, sin vinculación a la dimensión ética de la existencia. Dejemos por el momento ahí nuestra reflexión y retornemos al alma jurídica del Estado moderno. En efecto, si el Estado es la “violencia legítima” —en palabras lapidarias de Max Weber—, es cierto que “las armas deben ceder a la toga”, y es por eso que la fuerza pública, las fuerzas de seguridad, están orientadas en su acción por las atribuciones de las autoridades administrativas y judiciales. Es la alianza entre la fuerza y el derecho, que debería dar un paso más para llegar a una vinculación superior a la justicia.

Este es el objetivo del presente trabajo. Pretendo establecer la relación entre fuerzas de seguridad —en concreto la Guardia Civil— y justicia, a través de uno de los fenómenos más *injustos* de la sociedad contemporánea: la violencia, la violencia en todos sus órdenes, fundamentalmente la violencia que anida en el seno de la sociedad civil —por una vez, no la vincularemos a la violencia estatal o institucional— y, especialmente, la violencia oculta, íntima, casi invulnerable, la que se desarrolla en el interior del ámbito doméstico, que es *la más violenta de las violencias*.

I. LOS TRES AMBITOS DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE DERECHO

La democracia, una de cuyas dimensiones fundamentales es el sometimiento del poder al derecho, puede entenderse como aquel sistema político que intenta una canalización no violenta del conflicto y que castiga la violencia con procedimientos que minimizan la violencia también en la relación entre Estado y persona individual. Es así que la libertad depende en tan gran medida de las leyes. Kant decía que la función de las leyes es hacer convivir la libertad de todos.

En un Estado de derecho sólo se admiten dos tipos de “violencia legal”: la ejercida por los jueces y por la policía en dependencias de éstos.

La violencia judicial tiene su campo más evidente de expresión en lo penal. Se supone que el Derecho Penal tiene que tener como efecto una menor violencia. No siempre es así. No es este el lugar del debate sobre la represión del narcotráfico, pero valga como ejemplo de un desenfoque jurídico en cuanto que se trata —así lo corrobora la práctica— de un uso inidóneo de la legalidad, ya que ésta, indirectamente, se puede constituir involuntariamente en un elemento más de la cadena de la violencia.

Como dice Ferrajoli, el campo privilegiado de la violencia legitimada es esa intervención policial de tipo extrapenal o extrajudicial. Este tipo de violencia rompe el monopolio legal y judicial de la violencia represiva y es una excepción a la función garantizadora del derecho y del proceso penal. Es sabido que a los Cuerpos de Seguridad, a la Guardia Civil, se le confieren algunos poderes discrecionales de restricción de la libertad. “La Policía”, escribía Walter Benjamin, es “una mezcla casi espectral” de “dos especies de violencia”: aquella “que pone y aquella que conserva el derecho”. Esta característica particular, que le hace partícipe de todos los poderes del Estado, depende de la ambigüedad de su papel y de su posición y situación.

Los Cuerpos de Seguridad desarrollan una actividad administrativa formalmente organizada en dependencia del Poder Ejecutivo. A diferencia de otras ramas de la Administración Pública, tiene un contacto directo con las libertades fundamentales, no sólo como función auxiliar de la jurisdicción, sino también en virtud de funciones propias y *autónomas*, como es el caso de las acciones cautelares adoptadas frente a sujetos peligrosos o sospechosos. Es por esto, dice Ferrajoli, que su fuerza se manifiesta como “violencia”, y es por esto que tiene una latente legitimidad respecto al paradigma del Estado de derecho. Peligrosidad y sospecha son, de hecho, por su naturaleza, incompatibles con la forma de una legalidad estricta, dado que escapan de una clara predeterminación legal y dejan espacio a medidas en blanco basadas en valoraciones opinables, tan opinables como incontrolables.

Gracias a su ambigua configuración como función administrativa auxiliar a la judicial, la Policía puede trabajar extramuros del monopolio penal de la violencia, que en el Estado de derecho se reserva a la ley y al Juez. La Policía se coloca, señala Benjamin, en una zona fronteriza entre legislación y jurisdicción, gozando de la discrecionalidad de la una y de la fuerza

de la otra, y estando desvinculada de las limitaciones y de las fuentes de legitimación de ambas. En este sentido, la Policía es, al mismo tiempo, una Institución moderna y un residuo del antiguo régimen.

Es por eso que, tanto en nuestro país como en otros, se desarrolla, junto al derecho penal en sentido propio, un sistema autónomo de medidas o procedimientos policiales, preventivos, cautelares, de orden público, presididos por una amplia discrecionalidad administrativa, *ante o extra delictum*.

Esa situación, sólo reconducible a cauces constitucionales y de respeto a los derechos humanos por medio de una cultura democrática policial, de una formación estricta al respecto y de una voluntad política firme, sitúa a los Cuerpos de Seguridad, a la Guardia Civil, en la primera línea de la responsabilidad en el tratamiento inmediato, prejudicial, de la violencia privada, de la violencia social.

Este es, el de la violencia privada, el tercero de los ámbitos que, junto a la violencia judicial o policial, conviven en un Estado de derecho, que pretende combatir la violencia delictiva con la regulación jurídica exhaustiva y la minimización de la violencia judicial y policial. Pero, como veremos en el tercer capítulo de este trabajo, la violencia privada, sobre todo la más cercana a la vida familiar, ha tenido una atmósfera propicia a una especie de violencia *legal* que por tanto tiempo ha coexistido en nuestro ordenamiento jurídico. Hablo de los *poderes legales*, que se manifiestan en ocasiones en el uso de la fuerza física o en las diversas formas de explotación u opresión. Son los poderes legales del padre, del marido, del empleador, del superior jerárquico, ejercitados tantas veces sin límites ni controles en la familia, en las relaciones conyugales, en los hospitales psiquiátricos, en la escuela, en las fábricas. Poderes de similar naturaleza a los que se ejercitan en las cárceles, en los cuarteles, en los aparatos burocráticos.

II. MANIFESTACIONES Y ALCANCE DE LA VIOLENCIA PRIVADA DE LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA

La nueva fenomenología de la violencia atiende a un elenco amplio de dolorosos testimonios que machaconamente presenta un panorama de amplísimas dimensiones en las diversas violencias del mundo contemporáneo: la violencia sobre la naturaleza, sobre lo diferente, sobre los niños, sobre los marginados, etc.

Un reciente estudio de una Comisión nombrada por el Gobierno Federal alemán (1987), cuya misión consistió en estudiar las causas de la violencia, se detuvo en particular en varios tipos o modos de la misma.

En primer lugar, la violencia en la familia. Es la forma de violencia más extendida según estudios solventes realizados en los más diversos países. Por ello le dedicaremos una especial atención en el Capítulo III. Adelantaremos aquí, sin embargo, que las estadísticas —de las cuales carecemos casi por completo en nuestro país— hacen aparecer sólo la punta del iceberg. La citada Comisión alemana constató que, cada año, se registraban aproximadamente 2.000 casos de violencia familiar, con una tendencia a la baja en los últimos años, en razón de la bajada de la tasa de natalidad, pero que la cifra real podría estimarse entre 20.000 y 500.000 casos de malos tratos inflingidos a niños cada año. En cuanto a la violencia contra la mujer o la esposa, que es la más frecuente entre cónyuges, el Ministerio Federal de la Familia alemán calcula que 4.000.000 de mujeres son maltratadas por sus maridos cada año en la República Federal.

También la violencia en la escuela ha adquirido una relevancia sin precedentes. Cada día los medios de comunicación nos traen casos de violencia entre compañeros o de alumnos contra profesores o viceversa. Casos de vandalismo escolar, con deterioro de edificios escolares, de equipos, de material pedagógico y de instalaciones. Los gastos ocasionados por ello son importantes. Tampoco tenemos en España estudios ni estadísticas solventes. Probablemente sólo las compañías de seguros pueden proporcionar algunas cifras reveladoras.

Otro ejemplo de violencia muy conocida es la que se produce en los estadios deportivos. No tenemos datos policiales al respecto, pero todo el mundo sabe que la violencia en los estadios no sólo tiene una expresión en el interior de los mismos, sino que, normalmente después de los eventos, se va a expandir en zonas aledañas a los campos deportivos. Son conocidas las "operaciones de castigo" que determinadas bandas jóvenes realizan sobre quienes aparecen a su paso, principalmente personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables, ancianos, pobres, mendigos, inmigrantes de otras razas.

Tratándose de contiendas deportivas de una cierta violencia en sí misma, por ejemplo el fútbol, se entiende que el fenómeno de identificación del espectador, los símbolos o esquemas de los enemigos o guerreros, la fijación

por la victoria y hasta la comercialización deportiva, contribuyen a aumentar el riesgo de escaladas violentas.

Como decíamos, esta violencia se transfiere a las calles y plazas en donde ya hay un gran porcentaje de violencia irracional. Se trata de desórdenes caracterizados por destrucciones, como por ejemplo cabinas telefónicas, transportes públicos o edificios públicos. También aquí hay que incluir el caso de los incendios, de modo que el vandalismo no constituye sólo un problema específico de las grandes ciudades. El retrato robot del autor de actos de vandalismo no es homogéneo. Se trata a menudo de adolescentes y de jóvenes adultos de sexo masculino pertenecientes a todas las capas sociales. Suelen ser vandalismos realizados en grupos ya que hay aquí una búsqueda de identidad, como síntoma de las incertidumbres y de fracasos sufridos por una parte de la juventud o en sus esfuerzos para integrarse en la sociedad de los adultos.

También conocemos, en fin, en España la violencia de motivación política, expresada en la trágica acción terrorista, que ha golpeado a la Guardia Civil en numerosas ocasiones y que constituye uno de los campos preferentes de acción de este Cuerpo de Seguridad.

No se trata en este momento de profundizar en las causas de todos estos tipos de violencia. Sin duda, las causas son muy diversas y de diferente influencia. Hay un proceso de aprendizaje que tiene mucho que ver con la forma en la que se presenta por los medios de comunicación la violencia, cuando ésta obtiene un éxito, y que tiene que ver con el papel de la familia: reproducción de los modelos de agresión. También tiene que ver, indudablemente, con el efecto del alcohol y de las drogas.

Hay causas que operan a corto plazo y otras a largo plazo. En todo caso, juega un papel importante la acción policial, la acción de los Cuerpos de Seguridad en los conflictos agudos. La presencia y el comportamiento de las Fuerzas de Seguridad, de la Guardia Civil, juega un papel esencial en el proceso de escalada o desescalada del conflicto. El exceso, como la insuficiencia, de reacción de parte del Estado y de la Policía pueden contribuir a la escalada.

En todos los casos de violencia enumerados, el papel de la Policía y la Guardia Civil resulta fundamental. No es sólo tener unas leyes adecuadas o unos jueces competentes y justos.

La función de un Cuerpo de Seguridad contribuye decisivamente al desencadenamiento o al control de la violencia. Es por ello básico

que la Guardia Civil desarrolle un conocimiento científico de las causas y de la forma de prevención de la violencia. Utilizo premeditadamente el término *científico*, ya que no sólo es aplicable a la investigación delictiva, sino al encauzamiento adecuado de la violencia. Eso exige una formación fuertemente profesionalizada en los Cuerpos de Seguridad. En las manifestaciones que pueden degenerar en actos violentos, la información a los ciudadanos por parte de la Guardia Civil, la cooperación entre ésta y los organizadores, etc., son variables que conviene conocer y desarrollar porque contribuyen decisivamente al freno de la violencia. Lo mismo sucede respecto de la violencia en las calles con un reforzamiento del trabajo con la juventud. La violencia en los estadios puede atenuarse con prohibición de alcohol o con medidas de comunicación que permitan a la Guardia Civil estar perfectamente informada y preparada ante situaciones de conflictos. Y también, por último, en el caso de la violencia en la familia, combinando la represión del agresor con la protección de las víctimas a través de intervenciones rápidas y flexibles y de asistencia o tratamiento a largo plazo. A este respecto, la labor de las mujeres que, recientemente, han ingresado en la Guardia Civil puede ser fundamental. Se sabe, sin embargo, que la entrada de mujeres en la Guardia Civil no ha supuesto la utilización de sus servicios para este tipo de acciones respecto de la violencia doméstica, para la que estarían mucho más preparadas que los hombres.

La violencia familiar o doméstica, la "*violencia invisible*" en el interior de las casas o de los dormitorios es uno de los grandes desafíos del sistema judicial y policial español, enfrentado a una evolución creciente de los delitos violentos, según refleja la Memoria de la Fiscalía General del Estado referida a 1993. Por su importancia, voy a permitirme tratar este ámbito dramático de la violencia con mayor detenimiento.

III. LA GUARDIA CIVIL Y LA VIOLENCIA EN EL INTERIOR DE LAS FAMILIAS

El ámbito privado familiar, tradicionalmente representado como una especie de oasis feliz, se muestra, sin embargo, como uno de los lugares donde mayor opresión hay sumergida. La mayor causa de accidentes e incidentes —después del automóvil— es la familia.

Encabeza ese siniestro hit-parade la agresividad contra la mujer, rodeada de connota-

ciones sexuales y, habitualmente, realizada por el cónyuge o compañero.

Anteriormente hicimos referencia a las espectaculares cifras de mujeres maltratadas en Alemania. Según el FBI, una mujer es golpeada cada 18 segundos en Estados Unidos. Se calculan más de 4.000.000 de incidentes de violencia doméstica, contra mujeres, cada año, en ese país. Una tercera parte de mujeres asesinadas en Estados Unidos lo son por su compañero masculino. Ningún estrato o clase social es inmune a esta violencia. Esta violencia no es un problema desconocido. La historia está repleta de abusos y agresiones domésticas, y hasta hace muy poco tiempo no ha habido una respuesta legal adecuada. De hecho, en muchos países, la violencia contra la mujer era algo así como una especie de derecho del hombre y expresión de su autoridad en el seno familiar. El esfuerzo fundamental se focalizaba en el mantenimiento de la estructura familiar y no existía ningún tipo de ayuda o protección a las víctimas de la violencia doméstica.

En el seno de la familia, la situación de los niños maltratados es el otro aspecto de ese siniestro paisaje. Escribía Alice Miller en 1987 que la situación de un niño maltratado es peor y comporta consecuencias más graves para la sociedad que la situación de un adulto en un campo de concentración. A pesar de ello el fenómeno de la violencia sobre los menores va en aumento. Algo sabido, a pesar de que las estadísticas existentes al respecto son incompletas y están basadas en datos parciales sobre proyecciones. En España no hay cifras convincentes. En otros países las cifras que se manejan son impresionantes. Así, en Italia hay más de veinte mil episodios de violencia sobre niños, un 25 por 100 de carácter sexual, pero se calcula que la relación entre casos conocidos y casos no denunciados es de uno a diez. La edad media de las víctimas en el 43 por 100 de los casos es inferior a trece años y en el 20 por 100 inferior a siete. Una familia inglesa de cada diez conoce violencia sobre los niños, y de ese porcentaje el 10 por 100 sufren abusos sexuales. En Estados Unidos, en los últimos diez años, la violencia sexual sobre los menores ha aumentado en un 200 por 100. En Israel, según la profesora Liberman de la Universidad de Tel Aviv, el número de niños que mueren como consecuencia de violencias es mayor que el causado por accidentes de automóvil o enfermedades crónicas.

Tampoco la violencia en la infancia es un fenómeno que conozca diferencias de clase. No obstante, es cierto que algunos parámetros

sociales como el paro, las condiciones económicas desesperadas, el alcoholismo, la urbanización masiva, etc., son variables que contribuyen a aumentar los abusos.

El Consejo de Europa, en el *Congreso sobre la violencia en el seno de la familia*, ha propuesto una serie de medidas preventivas generales y específicas para la prevención de dicha violencia. Entre ellas concede una gran importancia a la información destinada a grupos específicos (especialistas sobre familias, niños en edad escolar, policías), a la necesidad de investigar e individualizar familias de alto riesgo, a la formación de padres jóvenes antes y después del nacimiento de los hijos, a la extensión de servicios sociales por categorías de riesgo, tóxico dependientes, alcohólicos, padres adolescentes, padres con perturbaciones psíquicas, inmigrantes, etc.

Como vemos, el Consejo de Europa ha reconocido en los Cuerpos Policiales a uno de los elementos básicos de prevención y combate contra la violencia familiar. Estos Cuerpos juegan un papel muy importante cuando una ayuda rápida es requerida para proteger a la víctima en caso de crisis familiar grave, porque la Policía o la Guardia Civil pueden ser contactados rápidamente en todo momento y en todo lugar, pero también porque las familias socialmente favorecidas apelan preferentemente a la Policía o la Guardia Civil. Naturalmente, la acción policial es sólo una de las necesarias. Está la intervención judicial y la de los servicios sociales de protección. Incluso, desde determinados puntos de vista, se considera que el principio a poner en práctica es "ayudar en vez de castigar", es decir, dar preferencia a alguna intervención en forma de ayuda más que de en forma de castigo. Así, la reacción se centraría fundamentalmente en la víctima, en los familiares o en personas más cercanas, considerando la denuncia y persecución ante los Tribunales Penales como una última ratio. Sin embargo, a mi juicio, la intervención policial es, en la mayoría de las ocasiones, un elemento insustituible, y ocurre que los policías o guardias civiles, cuando acuden al lugar de los hechos, se comportan a menudo de forma pasiva o son incapaces de ofrecer una ayuda, o coordinarse con asistentes sociales que se ocupen de aconsejar a la familia y encontrarles un lugar adecuado de refugio, en su caso.

¿Cuáles son las causas de las dificultades, de la importancia de la Guardia Civil para servir de ayuda eficaz e inmediata a las víctimas de la violencia familiar y para perseguir y poner a disposición judicial a los agresores?

Para empezar, hay un clásico mito que sigue teniendo una inercia apreciable, consistente en que la violencia doméstica es un "asunto familiar" en el cual los agentes estatales no deben interferir. Ello va unido a la idea también clásica de que las víctimas de la violencia familiar suelen ser las que provocan esa violencia. La respuesta legal a la violencia doméstica refleja, en muchos casos, esos estereotipos. Así, los agentes no han sido entrenados para intervenir en la violencia doméstica, considerada como un asunto privado en donde la autoridad del hombre debe respetarse, tanto respecto de la mujer como respecto de los niños. Nuestro Código Penal sigue adoleciendo de ese lastre histórico y la formación dada a los guardias civiles no intenta contrarrestarlo. No existen en España programas integrados en donde asistentes sociales, abogados, fiscales y policías o guardias civiles combatan la violencia doméstica. No hay, desde luego, unidades especiales formadas para esos objetivos. No hay nada parecido al llamado plan Quincy, puesto en práctica desde hace años en Norfolk (Massachusetts) o proyectos sobre violencia doméstica existentes en San Francisco, Minneapolis o Duluth. Hay aquí una muy eficaz respuesta policial, coordinando el aspecto preventivo con el represivo y el asistencial, en estrecho contacto con el sistema judicial. Son proyectos que unen una vigorosa persecución criminal, con servicios para la víctima y rehabilitación para los agresores. Son proyectos, en fin, que se financian con fondos locales y estatales; también con ayuda privada.

Hoy tenemos que plantearnos ir más allá de en la respuesta a la violencia doméstica. Porque ya no basta con la ayuda afectiva, sino que, por el tipo especial de violencia de que tratamos y el ámbito en el que se desarrolla, el objetivo final debe ser la eliminación de la violencia, eliminando las actitudes sociales que explican que en el 95 por 100 de los casos la agresión familiar sea de hombres sobre mujeres y de adultos sobre niños.

Esto obliga a desarrollar nuevas respuestas en el campo del derecho civil, que, a veces, no pueden pasar por el divorcio o la separación, ya que esto no es opción para las víctimas que, por razones financieras o incluso religiosas, quieren que acabe la violencia pero no el matrimonio. Tampoco es una opción, obviamente, para los niños.

Las respuestas tienen que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres que denuncian una agresión señalan que han sido objeto de abusos sexuales o violación, normalmente por

sus propios maridos. Todo ello requiere también serias modificaciones en nuestro Derecho Penal.

Pero la protección de las mujeres agredidas, por centrarnos en este ejemplo de violencia doméstica, no requiere sólo leyes sino una acción ejecutiva eficaz. Hasta ahora, sin embargo, la Policía o la Guardia Civil han respondido de una forma muy débil a las denuncias de violencia doméstica. Esta respuesta inadecuada proviene de creer que el hombre puede usar una cierta fuerza contra su mujer, o de una cultura apoyada en la idea de que la Policía no debe interferir en la esfera privada de la familia o, en fin, de que hay una falta de formación profesional para reconocer y perseguir adecuadamente los casos de violencia doméstica. Es claro que la Guardia Civil debería profundizar en programas de entrenamiento en ese ámbito, que le permitan responder adecuadamente a la violencia doméstica de la misma manera que responde a la violencia entre personas que no se conocen.

Sucede a menudo que cuando la Guardia Civil interviene en situaciones de violencia familiar, intenta evitar la detención del agresor para limitarse a aplacar a las partes. Sigue habiendo una tradición que hace que la Guardia Civil responda a la violencia familiar principalmente a través de la mediación, intentando reconciliar a las partes, utilizando el poder de arresto sólo como último recurso.

Desde mi punto de vista, en muchas ocasiones este intento de mediación fracasa en el tratamiento adecuado y el conocimiento de las raíces de la violencia doméstica. Al concebir a ésta sólo como una "disputa familiar" que debe ser solventada a través del compromiso, esa mediación trivializa la seriedad de la violencia doméstica. Y ello porque se presume que el problema es la relación entre las partes, que la causa está en ambos cónyuges y que el compromiso es la adecuada solución al problema. No se distingue suficientemente el agresor del agredido y hay una cierta complacencia en admitir que ha habido una víctima provocadora de la agresión.

Un estudio realizado en Minneapolis en 1984 comparó los efectos producidos por tres diferentes formas de respuesta policial a la violencia doméstica: arresto y detención por una noche, mediación, y requerimiento al agresor a dejar la casa ocho horas. Los investigadores concluyeron en que la opción del arresto era la más efectiva para evitar la violencia posterior. Sucedió que, a pesar de que el Fiscal General de los Estados Unidos recomendó el arresto como acción a realizar por la Policía normalmente

en respuesta a la violencia doméstica, en muchos Estados la Policía no podía hacer legalmente ese tipo de arrestos ya que no había suficiente tipificación de la conducta. En los casos en que sí era posible, muchos departamentos de Policía no hicieron uso de esa capacidad de arresto. Soluciones de este tipo deberían aplicarse en nuestro país.

La verdad es que, en muchas ocasiones, una adecuada respuesta policial puede producir más apoyo psicológico a la víctima que una asistencia psicológica o un consejo de especialistas. Es claro, en todo caso, que debería ponerse en práctica en España todo un programa legal que integrase una respuesta global al problema de la violencia familiar, a través de leyes civiles y penales sustantivas y de procedimiento, con capacidad de arrestos especiales por la Policía y la Guardia Civil en una acción coordinada por parte de los Cuerpos de Seguridad, Fiscales, Jueces y Servicios Sociales, que enviase un inequívoco mensaje al agresor, a la víctima, y a la sociedad en el sentido de que la violencia familiar no va a ser tolerada por más tiempo.

En este esquema, la acción de la Guardia Civil, en su ámbito territorial, es sencillamente insustituible. Dado que es la Guardia Civil, generalmente, el primer contacto que víctimas y agresores tienen con el sistema de Justicia Penal, cualquier respuesta estatal de este fenómeno tiene que dar un papel de intensa

implicación a la Guardia Civil, y esto significa programas de formación y entrenamiento específicos para la misma con una participación acusada, como decíamos, de las mujeres que hoy día forman parte del Instituto. La Guardia Civil debe jugar un papel fundamental en la asistencia a las víctimas de la violencia doméstica, integrando a miembros de la misma en "equipos de crisis" que incluyan asistentes sociales y consejeros jurídicos debidamente formados. La Guardia Civil debe permanecer en escena hasta que la víctima salga de todo peligro, para ayudarla a obtener tratamiento médico y asistencia social y jurídica. Deben desarrollarse programas de entrenamiento y formación que eliminen actitudes discriminatorias y desarrollen aproximaciones mucho más apropiadas al problema de la violencia familiar, haciendo aún más responsable a la Guardia Civil de la solución de aquél.

Todo ello requiere, sin duda, una nueva forma de desarrollo de los servicios policiales y, seguramente, un nuevo modelo policial incluso. La violencia familiar y su prevención y represión por parte de los Cuerpos de Seguridad es un ejemplo de la necesidad de acabar en nuestro país con un modelo policial generalista, de vigilancia territorial, con una lógica de implicación cuasimilitar, para pasar a una Guardia Civil especializada, profesionalizada y modernizada en sus estructuras, en sus medios y en su cultura. ■